

EL COMERCIO.

Año XXXIV.

Martes 4 de Abril de 1876.

Num. 11,382.

CADIZ 4 DE ABRIL.

Publicamos el Domingo un extracto de varias reglas acordadas por las direcciones generales del tesoro público y de contribuciones é intervencion general de la administración del Estado para la ejecución de la instrucción de 27 de Enero sobre la emisión y canje de títulos del préstamo de 175 millones.

En esas reglas, aclaraciones, ó explicaciones creemos falta una esencialísima, concerniente á un punto de bastante entidad, y que además es concerniente á casi todas las personas contribuyentes al préstamo.

La instrucción citada de 27 de Enero, dice textualmente en su art. 37:

«Los décimos de cada vencimiento que no puedan acomodarse en pago del 10 p. S. del cupo para el tesoro en el año económico á que correspondan, serán admitidos en los inmediatos siguientes.»

De cómo y en qué forma se hayan de ejecutar las operaciones á que esto dará lugar, nada se dice.

¿Se han de admitir esos sobrantes en parte de pago de todos los semestres sucesivos, ó solo de alguno de ellos?

¿Se podrá pagar con ellos el importe total de los recibos presentados al cobro.

¿Se admitirán solo en pago del 18 por 100 de la contribución territorial?

En este caso ¿podrá ser por la totalidad ó solo por una parte?

Y si no hubiese de ser por el todo, ¿en qué proporción será?

Si hubiese alguna limitación, necesario sería conocerla; y en tal caso habrá que consignar de algún modo cómo se haya de ejecutar la operación en los recibos ó cartas de pago con que se verifica la recaudación de contribuciones.

Esto es de más importancia de lo que á primera vista parece, pues la diferencia de los títulos no acomodados en el tercer trimestre de cada año económico (el actual es en el 4.º) ascenderá á más de la octava parte, como vamos á demostrar.

Después de las vicisitudes experimentadas en su repartimiento por el préstamo de los 175 millones, resultó ser en definitiva la derrama hecha sobre la propiedad, de 106, 10 por 100 sobre los 19 por 100 de contribución territorial pagados entonces; ó lo que es igual, pero más claro, el préstamo se cobró al respecto de 20'16 por 100 sobre la cantidad líquida imponible de cada propietario.

Ese préstamo se ha de extinguir por décimas partes en diez años; pero se pretende que sea en cada uno de los terceros trimestres económicos—como ya digimos—con la décima parte de la contribución territorial, que es en la actualidad 18 p. S. Y como eso es materialmente imposible; pues la décima parte de 18 p. S. no alcanza á cubrir la décima de los 20'16 p. S. ha de resultar forzosamente un exceso de 2'16 p. S.; más de la octava parte, según indicamos antes.

Añádase á esto los intereses á 6 por 100, que si bien son solo 3 p. S. el año actual, en los sucesivos aumentará progresivamente hasta el último, que alcanzará la respetable cifra de 57 p. S.

Esta y otras confusiones ofrecidas en la práctica en estas operaciones, creemos provienen de un error que no se ha querido reconocer: que se pretende disimular el haber señalado para la

extinción de las décimas partes del préstamo las décimas partes anuales de la contribución anual, sin advertir la diferencia existente entre ambas unidades, ó sea en las cantidades de que esas unidades proceden.

Hubierase evitado esa confusión y muchos trabajos y entorpecimientos, si partiendo del reconocido principio de que en cada uno de los diez años primeros se ha de extinguir la décima parte del préstamo con sus respectivos intereses, se aceptase á cada contribuyente en pago de su cuota respectiva, títulos del vencimiento á que correspondiesen, á voluntad, en parte, ó en totalidad.

Cierto es que así habría muchos contribuyentes que pagarían en papel el total de sus respectivas cuotas, entre tanto que otros todo lo pagarían en efectivo, pero esto procedería del movimiento natural de la propiedad, ó de la compra-venta de los recibos provisionales y de los títulos representativos del préstamo; y al cabo nunca resultaría ni podría resultar que la Hacienda hubiese recogido más títulos de los debidos; pues que solo percibiría los expedidos, y nunca antes de sus respectivos vencimientos.

Hemos contraído nuestras razones á la propiedad territorial; pero la mayor parte de ellas son aplicables también al subsidio industrial y de comercio; por lo cual, y en obsequio á la brevedad, no vamos más adelante; creyendo por otra parte que lo dicho es suficiente para llamar la atención de quienes correspondan, caso de que nuestras reflexiones merezcan el honor de ser atendidas.

Algunos señores diputados empiezan á celebrar reuniones periódicas con objeto de crear un gran centro parlamentario, no político, no que inspire á los gobiernos temores por su existencia, sino que favorezca su acción, que le apoye en la política, que prefiera los gobiernos durables, pero que consagre todos sus esfuerzos al estudio de las muchas cuestiones cuya resolución pueda mejorar la condición de los pueblos.

El Viernes en la noche se reunieron en el Congreso más de 30 diputados, cuyas patrióticas declaraciones habrían aplaudido el país. No se iba allí á poner en lucha los intereses de escuela en materias económicas: no se defendía allí ningún principio exagerado: no se abogaba por la conveniencia de una provincia determinada en perjuicio de las demás, ni se establecían competencias entre productores é industriales, entre agricultores y comerciantes: era más alta, era más noble, era más plausible la aspiración de aquel núcleo de señores diputados: querían armonizar los intereses de unas y otras provincias: querían levantar las barreras que hoy oponen, ya la insuficiencia de medios de comunicación, ya el tipo excesivo de las tarifas de ferro-carriles, ya la desigualdad con que pesan los impuestos: querían que la industria y la agricultura fueran hermanas; que alcanzase á ambas como á las artes, como al comercio, como á todas las manifestaciones del trabajo. La solicita vigilancia de los legisladores y del gobierno, y que ya por medio del examen de los tratados, ya por otros nuevos, ya estudiando los resultados de anteriores estipulaciones y el efecto de las reglas arancelarias, fueran apreciadas y tomadas en consideración cuantas noticias suministrara la iniciativa individual y hubiera recaído el gobierno

para proponer con conocimiento de causa las reformas convenientes.

Aunque los diputados reunidos no profesaban doctrinalmente los mismos principios económicos, todos reconocieron la necesidad de los esfuerzos reclamados por este gran período de reconstrucción social que ha de acometerse á la sombra de la monarquía, y todos estuvieron unánimes en que al país le hace falta menos política, pero mayor dosis de acertada administración.

Para proponer, pues, un orden concreto de trabajos, para coordinar y ensanchar las adhesiones en este gran centro, fué nombrada una comisión compuesta de los Sres. Primo de Rivera, marqués de Viesca de la Sierra, Santos (D. Emilio), Escobar, Bosch y Labrás, Alba Salcedo, Sanchez Arjona, Tudela y Azcárraga (D. Manuel); comisión que en breve plazo dará cuenta de sus trabajos.

Todos los periódicos consagran expresivas y benévolas frases al Sr. Escobar con motivo de su discurso en apoyo de la necesidad de repoblar el arbolado. La simpatía con que son acogidos los trabajos que se encaminan á fomentar de cualquier modo la riqueza pública, demuestra claramente cual es el espíritu del país, fatigado de las teorías políticas y de las recriminaciones personales y retrospectivas, y ansioso de que sus representantes den la preferencia á los asuntos de verdadero interés.

Leemos en *La Epoca*:

«Es cierto, como dice *La Correspondencia*, que no un conocido banquero solamente, sino también un rico propietario, nos referimos á los señores don Adolfo Bayo y marqués de la Viesca, se proponían ayer dirigir una pregunta al señor ministro de Hacienda, con objeto de que este pudiera calmar la especie de ansiedad que existe con motivo de las soluciones que puedan envolver los futuros presupuestos.

A dichos señores, como á otros muchos, se les dirigen constantes escitaciones y se les advierte que la reserva absoluta guardada sobre este asunto está sirviendo á los agiotistas para esparcir los más absurdos rumores que influyen en la depreciación de los fondos.

No extrañamos que haya cierta impaciencia por conocer el pensamiento de señor ministro sobre el más grave de los problemas que el Gabinete ha de resolver, ni nos sorprende que la natural y calculada prudencia del Sr. Salaverría sirva de pretexto á los especuladores, que por lo común no tienen extrañas sino para acariciar el mejor fruto de sus especulaciones; pero si el señor ministro se hubiera hallado presente y la pregunta se le hubiera dirigido, no es probable que anticipara noticia alguna en negocio tan grave, nota por complacer á los especuladores. Lo que es la situación, no necesita decirlo el señor ministro de Hacienda, la conocen perfectamente cuantos se ocupan en las cosas públicas, y el Sr. Salaverría no podrá hacer más que consignarla oficialmente.

Por nuestra parte, añadiremos que como este año no es posible aun disminuir la cifra de los gastos á lo que debe ser el presupuesto de la paz, y como en el punto más importante son necesarios convenios que no sabemos se hayan iniciado, el Sr. Salaverría obrará con su prudencia acostumbrada, no proponiendo soluciones definitivas, sino empezando por decir la verdad al país, protestando de la obligación de honor que este tiene de hacer frente á sus compromisos, y haciendo todo aquello que esté dentro de la publicidad llevada á sus últimos límites.

Hay mucho que hacer para desarrollar la fuerza contributiva del país, á fin de acrecentar los ingresos; hay que des-

cubrir las ocurrencias; hay que emprender una marcha activa y enérgica; pero todo esto exige tiempo y que los ministros tengan que rendir menos culto á la política para consagrarse á la administración, en que tanto bueno se puede hacer.

La Correspondencia, que es quien dá la última noticia, dice y no lo dudamos, que han de llamar mucho la atención las cuestiones de los presupuestos cuando se ventilen en la Cámara, pues no solamente habrá que tratar al discutirlos de muchos asuntos muy importantes, sino porque será curiosa la anatomía que el señor Salaverría hará de la Hacienda de la revolución.

Dice *El Popular*, y lo celebraremos, que el señor ministro de Hacienda se propone nivelar las mensualidades atrasadas que corresponden á las clases pasivas de provincias y satisfacer al clero lo que tiene devengado y sin percibir, según vaya desahogándose el Tesoro público de las múltiples obligaciones á que tiene que atender.

El señor director general del arma de infantería ha dirigido á varios periódicos un ejemplar del *Escalafón general de señores jefes y oficiales del arma* en 1.º de Enero del año actual. Es un libro muy curioso é importante por los datos que suministra á la conclusión de la guerra civil.

Prescindamos de las noticias históricas, así sobre la denominación de los jefes superiores del arma de infantería como de la lista cronológica de estos desde 1704 hasta el día, y aun los que se refieren á la organización actual del cuerpo con arreglo á las últimas disposiciones generales del decreto de 21 de Setiembre de 1874 y reales órdenes de 30 de Julio de 1867, y 14 y 27 de Julio y 7 de Agosto de 1875. Fijándonos solo en los números que arrojan sus estadísticas, haremos constar que el arma de infantería estaba compuesta en dicha fecha de 40 regimientos de línea, sin el Fijo de Ceuta y é batallón provisional, 20 batallones de cazadores, 40 de reserva, 51 de provinciales y 8 sedentarios. Los regimientos de línea se componían de dos batallones de á 1.200 plazas cada uno, número de plazas que es común á los demás batallones de infantería.

Á la alta cifra que la suma de estos componentes arroja, hay que añadir la estadística de los jefes y oficiales, según consta en el mencionado escalafón. En efecto, el arma de infantería contaba 314 coroneles; 438 tenientes coroneles; 1.288 comandantes; 2.521 capitanes; 3.421 tenientes, y 3.798 alféreces, comprendidos en este número los 1.021 de las milicias provinciales, en total: 11.780 jefes y oficiales, es decir, un ejército de oficiales mayor que el que constituye la fuerza militar permanente de algunos Estados de Europa. Pero tales han sido las necesidades impuestas por la guerra, que deja atrás si entra sus multiplicados y difíciles problemas que resolver, el de atender con la solícitud á que se han hecho acreedores, á la colocación y porvenir de un número tan considerable de dignos oficiales en la mejor edad y con aptitud y la disposición necesaria para prestar al país sus servicios, en lo que el tacto de su

